

# Caminantes permanentes.

Éxodos masivos y protestas campesinas en Colombia, 1975-2001

*A aquellos que son excluidos se les priva de recursos materiales, pero aún más de su capacidad de ser sujetos<sup>1</sup>*

Alberto Melucci

*Es muy triste no tener derecho a ir al lugar donde estuve siempre, donde derramé el sudor de mi existencia. En esa finca viví desde los 17 hasta los 54 años. Crié a ocho hijos y los metí a la escuela con lo que me daba la tierra... Ahora estoy aquí en calidad de miserable, a la espera de un mercado o de un almuerzo, sin nada que hacer... es muy fuerte la rabia que produce esta humillación que siente uno como campesino honesto. Es una humillación a la que no veo nombre que ponerle<sup>2</sup>.*

Testimonio de un desplazado de Urabá en 1997.

## PERMANENT WANDERERS

### MASSIVE EXODUS AND PEASANT PROTEST

Drawing on a data-base of social protest and massive exodus in the countryside between 1975 and 2001, the authors illustrate the many faces of agrarian conflict. Although the peasant protest principally denounces material privation, over the years this has tended to diminish and to turn towards demands that are more political and cultural. This reflects the growing weight of internal warfare, which in turn is corroborated by the recent increase of massive exodus in the country. These processes have dramatic consequences over the access to land, control of territories and change of identity, as well as generating new scenes in which the tension between humiliation and dignity is reenacted.

## MARCHEURS PERMANENTS

### EXODES MASSIFS ET PROTESTATIONS PAYSANNES.

A partir de statistiques concernant les protestations sociales et les exodes massifs dans la campagne entre 1975 et 2001, les auteurs illustrent les multiples facettes du conflit agraire. Si la protestation paysanne dénonce principalement les carences matérielles, elle tend à diminuer mais aussi à se modifier au fil du temps en demande plus politiques et culturelles. Ce fait reflète le poids croissant de la guerre interne, ce dernier étant confirmé par l'augmentation récente des exodes massifs dans la campagne. Ces processus ont des conséquences dramatiques en terme d'accès à la terre, contrôle de territoires et changements d'identités, tout comme ils génèrent de nouveaux scénarios qui voient se reproduire la tension entre humiliation et dignité.

## CAMINANTES PERMANENTES

### ÉXODOS MASIVOS Y PROTESTAS CAMPESINAS

A partir de una base de datos sobre protestas sociales y éxodos masivos en el campo entre 1975 y 2001, los autores ilustran las múltiples caras del conflicto agrario. Si bien la protesta campesina denuncia principalmente las carencias materiales, tiende a disminuir pero también a modificarse con el paso de los años hacia demandas más políticas y culturales. Ello refleja el creciente peso de la guerra interna, lo que a su vez es ratificado por el aumento reciente de los éxodos masivos en el campo. Estos procesos tienen consecuencias dramáticas en términos de acceso a la tierra, control de territorios y cambio de identidades, así como también generan nuevos escenarios en donde la tensión entre humillación y dignidad se reproduce.



a cita de un conocido teórico de los movimientos sociales, el italiano Alberto Melucci, no se refiere a los desplazados colombianos sino a quienes protestan en cualquier

parte del mundo. Su denuncia apunta a las situaciones globales de injusticia que generan sentimientos de rebelión. En nuestro caso, como lo atestigua un desplazado en Urabá, la exclusión está llegando a niveles inconcebibles de deshumanización, especialmente en el caso del desplazamiento forzado, que no sólo arrasa con los precarios bienes de las víctimas, sino que les rompe los lazos sociales, socava la dignidad humana y destruye lo que algunos acertadamente designan como "los proyectos de vida"<sup>3</sup>. Es una humillación sin nombre que produce rabia. Si bien, los colombianos no han sido pasivos ante esta situación, el incremento de la migración no voluntaria causada por la desbordante violencia hace que sea cada vez más difícil protestar, especialmente en los campos.

En efecto, a partir de mediados de los 90, el fenómeno del desplazamiento forzado dejó de ser un dato más del tradicional flujo migratorio campo-ciudad, para convertirse en otra expresión dramática de la cada vez más degradada guerra interna que nos envuelve. Si el pionero estudio de la Conferencia Episcopal señalaba que entre 1985 y 1994 había 586.261 desplazados, estudios recientes basados en las estadísticas construidas por CODHES (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento) hablan de 2'200.000 hasta el año 2000<sup>4</sup>. Es decir, tenemos tanta gente desplazada como la que habita en las ciudades de Medellín o Cali, y la gran mayoría huyó

<sup>1</sup> Alberto Melucci, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México: El Colegio de México, 1999, pág. 19.

<sup>2</sup> Citado en Carlos A. Giraldo, Jesús Abad Colorado y Diego Pérez, *Relatos e imágenes: el desplazamiento en Colombia*, Bogotá: Cinep, 1997, pág. 27.

<sup>3</sup> Véase, por ejemplo, a Donny Meertens, *Desplazamiento forzado y género: trayectorias y estrategias de reconstrucción vital* en Camilo Domínguez y Fernando Cubides (eds.), *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*, Bogotá: CES/Ministerio del Interior, 1999.

<sup>4</sup> Véanse Conferencia Episcopal de Colombia, *Derechos humanos y desplazamiento por violencia en Colombia*, Bogotá: Conferencia Episcopal de Colombia, 1995, pág. 43, y Diego Pérez, *El desplazamiento forzado en Colombia durante el gobierno de Pastrana*, manuscrito, CINEP, septiembre de 2001, pág. 16.

de sus lugares de origen en los últimos cinco años cuando el desplazamiento forzado pasó de cubrir 2% de la población total, a casi el 5%. La peor parte la llevan quienes viven en el campo. Para fines de los noventa, el 66% de los desplazados tenía vínculos rurales, así sólo una cuarta parte de la población total colombiana habitara en el agro<sup>5</sup>.

Sin duda estamos ante una crisis humanitaria de proporciones aterradoras. Como lo señalan los autores que han estudiado el fenómeno, éste no es nuevo en el país —ya se veía desde las guerras civiles del siglo XIX o más cerca en la Violencia de mediados de siglo XX— y tampoco es único —en el mundo se habla, para 1994, de 17'000.000 de refugiados internacionales y de 25'000.000 de desplazados internos<sup>6</sup>. Lo singular del caso colombiano es la cantidad e intensidad con que se presenta al cambio de siglo. Pero también, como insisten los estudiosos del desplazamiento forzado, éste no ha sido bien comprendido y tal vez ello explique el precario marco jurídico que intenta dar cuenta de él, la lenta y ineficiente respuesta oficial, y la indiferencia generalizada de la sociedad ante el fenómeno.

Es hora, pues, de pasar de la denuncia al análisis. Esto es lo que nos proponemos hacer en este ensayo tomando dos ángulos del problema: la protesta campesina y los éxodos masivos desde áreas rurales. Para ello nos apoyamos en la base de datos sobre luchas sociales que viene construyendo el CINEP desde los años setenta<sup>7</sup>. Antes de entrar en materia, haremos unas precisiones conceptuales y metodológicas, y luego consideraremos las dos caras de una misma moneda, que es el conflicto agrario colombiano.

## CONCEPTOS Y METODOLOGÍA

La primera categoría para capturar información es *protesta social*, entendida como aquella acción social colectiva de más de diez personas que irrumpen en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas y presionar soluciones ante el Estado en sus distintos niveles o ante entidades privadas. La protesta puede ser expresión de movimientos sociales, pero no necesariamente los generan, puesto que éstos necesitan mayor permanencia y pueden acudir a otras modalidades de acción para hacerse visibles<sup>8</sup>.

La otra categoría que utilizaremos en este escrito es *éxodo masivo*. Por él entendemos aquellos desplazamientos internos forzados de más de diez familias provenientes de un espacio común, en este caso referido al campo —veredas, case-ríos y corregimientos— en un mismo tiempo. Para precisar este concepto debemos aclarar sus contornos. Comúnmente se distingue entre migración voluntaria, generalmente socioeconómica, y desplazamiento forzado, el fenómeno que nos ocupa. Este último corresponde a un tipo de movilidad poblacional forzada por circunstancias externas a las víctimas —en el caso colombiano, la violencia en sus distintas

expresiones— y por tanto no es preparado y tiene un carácter —en principio— provisional, aunque en Colombia tiende a ser duradero. A su vez, el desplazado interno se refiere a quien se mueve dentro de un territorio nacional, mientras el carácter de refugiado externo se le atribuye al que traspasa los límites internacionales en su huida. Al hablar de éxodos masivos tomamos el indicador de diez familias como una aproximación al número mínimo que habita una vereda. Para nuestras estadísticas dejamos de lado la salida individual o estrictamente familiar, sin que ello signifique que la despreciemos. La razón de esta selección —legítima si se hace explícita—, es que nuestro énfasis investigativo ha estado orientado desde hace años a la acción social colectiva.

A diferencia de las cifras sobre desplazados iniciadas por la Conferencia Episcopal y continuadas por CODHES, nosotros tomamos como unidad de información la acción del éxodo masivo. En consecuencia, no damos cuenta de la magnitud total del fenómeno, puesto que no medimos el número de desplazados, sino que contabilizamos los éxodos masivos. Además, nuestra principal fuente de información es la prensa nacional y regional<sup>9</sup>. Esto significa que la visibilidad, tanto de la protesta como del éxodo, se juega en el terreno del otro, en este caso en el de la gran prensa, lo que además de limitar el alcance de nuestra investigación, pone un reto a los actores para hacer públicas sus demandas.

La base de datos de luchas campesinas, sobre la que se apoya este ensayo, registra las protestas y éxodos masivos de los sin tierra, arrendatarios y aparceros, colonos, pequeños y medianos productores<sup>10</sup>. Esta base también incluye acciones colectivas protagonizadas por indígenas —quienes mantienen patrones culturales e instituciones comunitarias que les otorgan una identidad étnica diferente a la campesina—, así su actividad de protesta no sea muy notoria<sup>11</sup>. Con relación a los afrodescendientes, no hubo muchos registros de acciones colectivas porque, o no asumen tal identidad cuando las realizan, o la prensa no los hace visibles en esa calidad. Pero, sin duda, sus rostros, como los de las mujeres del campo, están presentes en las multitudes que consideramos.

Hasta ahora hemos hablado de protestas sociales y éxodos masivos como si fueran fenómenos similares. En sentido estricto, el éxodo masivo no es una protesta por dos razones: no tiene la pretensión de interrumpir, así sea temporalmente, el orden establecido, y no es un acto voluntario e intencional como en principio lo es la lucha social. Sin embargo, no nos cabe duda de que ambos fenómenos son expresiones de conflictos similares. Al mirar el comportamiento de las dos series en el gráfico 1, se percibe una tendencia paralela hasta 1996, aunque en magnitudes diversas. A partir de ese año, el declive de las luchas campesinas contrasta con el aumento de los éxodos masivos, sugiriendo una transformación severa en la dinámica de la protesta

*campesina*

<sup>5</sup> Según CODHES para los años 1995-1997, entre el 60 y el 69% de los desplazados tenía vínculos rurales, es decir, cumplía una de estas tres características: vivir en una vereda, tener acceso a la tierra o que algún miembro de la familia la labore. *Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*, Bogotá: CODHES-UNICEF, 1999, pág. 412.

<sup>6</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 14.

<sup>7</sup> El equipo de movimientos sociales de esa institución completó recientemente la información para los años 1975-2000 en el marco del proyecto *25 años de luchas sociales en Colombia* cofinanciado por COLCIENCIAS.

<sup>8</sup> Véase una ampliación de estas definiciones en Mauricio Archila, *Vida, pasión y ... de los movimientos sociales en Colombia*, en Mauricio Archila y Mauricio Pardo (eds.), *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*, CES-Universidad Nacional/ Icanh, 2001, págs. 18-19.

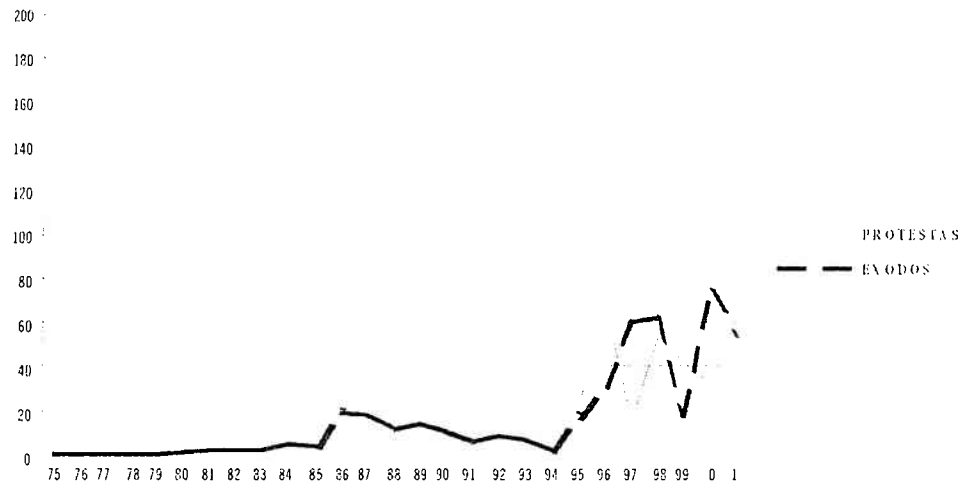
<sup>9</sup> Los periódicos consultados fueron: *El Tiempo*, *El Espectador*, *El (Nuevo) Siglo*, *La República*, *El Colombiano*, *El País*, *El Heraldo*, *Vanguardia Liberal*, y el semanario *Voz (Proletaria)*. Las mencionadas instituciones que cuantifican el fenómeno, tienen además otros instrumentos metodológicos como encuestas a desplazados. Esto les permite una aproximación más completa, especialmente a CODHES, que cuenta con un sistema de información (SISDES).

<sup>10</sup> Aquí no se agota la discusión en torno a la definición del campesinado. Un rápido recorrido sobre posturas, modelos y enfoques se encuentra en Carlos Salgado y Esmeralda Prada, *Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995*, Bogotá: CINEP, 2000, capítulo 1.

<sup>11</sup> La prensa hizo visible la protesta de los indígenas tan sólo en un 9% de las acciones como actor principal de las luchas y en un 3% en alianza con campesinos y sectores urbanos.

Gráfico 1

PROTESTAS Y ÉXODOS CAMPESINOS  
1975-2001



campesina. La descripción y explicación de estos procesos constituye el tema central de lo que resta de este ensayo.

#### PROTESTAS SOCIALES Y ÉXODOS MASIVOS EN EL CAMPO

Entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 2001 se presentaron 1.958 acciones colectivas en el campo. El promedio anual de luchas fue de 72 acciones, es decir alrededor de seis protestas por mes. Como lo describe el gráfico 1, en esos 27 años hubo una trayectoria de las luchas sociales en el campo que representa una cierta tendencia cíclica de auge y declive.

En cuanto a *modalidades de protesta*, la base de datos de luchas campesinas registra seis: invasiones de tierra, movilizaciones o marchas, tomas de entidades, paros agrarios, bloqueos de vías y disturbios o enfrentamientos con las autoridades, diferentes, por supuesto, de las acciones armadas.

Las invasiones significaron el 56,8% de las acciones colectivas de los campesinos<sup>12</sup>. El promedio de invasiones entre 1975-1991 fue de 68 ocupaciones por año. La lucha por la tierra presentó un punto de ascenso hasta 1987, cuando se registraron 113 ocupaciones de predios, y luego descendieron hasta prácticamente desaparecer en 1991. La pérdida de dinamismo de las invasiones a partir de 1988 se explica por el incremento de la violencia de los años ochenta, especialmente por la presencia del paramilitarismo. Otro argumento para desactivar las invasiones lo impuso la Ley 30 de 1988, al prohibir al INCORA afectar predios invadidos<sup>13</sup>.

Las movilizaciones marcaron el ritmo de la protesta durante las últimas dos décadas y representaron el 18,6% de las acciones del período estudiado. Las tomas de entidades constituyen un recurso desesperado de un conflicto limitado por prácticas represivas del Estado o por la violencia

desbordada de los actores armados. Este tipo de lucha, que ocupa el tercer lugar de las acciones, representó el 11,6% del total. Los paros, al igual que las movilizaciones, aparecen en todos los años del período, pero no por ello son la modalidad de lucha más destacada. El conjunto de paros (tanto cívicos con participación campesina como estrictamente agrarios) representó el 6,6% de las acciones de la base de datos de luchas campesinas. Los bloqueos de vías buscaron presionar soluciones al conflicto en situaciones similares a las tomas de entidades. Esta modalidad de lucha representó el 6% de las acciones colectivas, y fue importante entre 1995 y 2000 cuando se realizó el 53% de ellas. Por último, las confrontaciones con la fuerza pública sólo ocuparon el 0,3% de las protestas, y se presentaron en el segundo quinquenio de los años setenta por desalojo de predios tomados por campesinos con anterioridad.

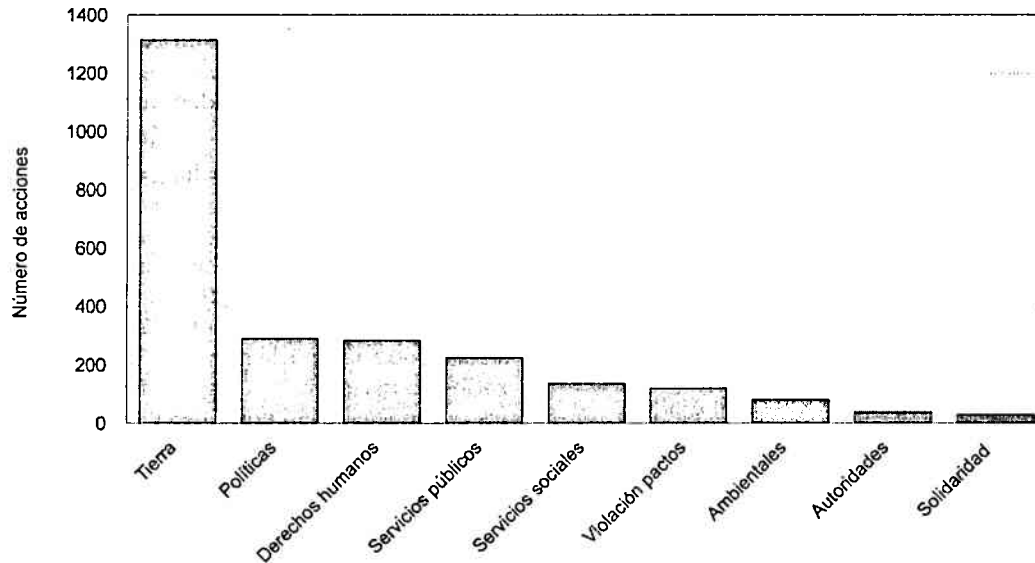
Otra variable que considera la base de datos sobre luchas campesinas corresponde a los *motivos de la protesta*. Como se ilustra en el gráfico 2, los motivos que sostienen las protestas en el campo están agrupados en nueve categorías, ordenadas por su peso cuantitativo: i) tierra, relativos a la tenencia y propiedad de ella; ii) demandas políticas, especialmente económicas y agrarias; iii) derechos humanos: violación de los derechos civiles y políticos y del DIH; iv) servicios públicos, transporte e infraestructura; v) servicios sociales, especialmente educación y salud; vi) violación de leyes o incumplimiento de acuerdos suscritos en protestas anteriores; vii) ambientales: contaminación, prevención y gestión del riesgo; viii) autoridades, en torno a la gestión de los gobiernos locales; y ix) solidaridad con protestas o denuncias de otras organizaciones sociales.

La demanda por tierra en el campo fue el motivo más convocante con un poco más de la mitad de las protestas. Sin embargo, su peso cuantitativo tiende a disminuir con el paso del tiempo. En un contexto de creciente violencia, la lucha por la tierra dejó de ser el motivo prin-

<sup>12</sup> La prensa les restó importancia, de tal manera que en los años ochenta tan sólo registró alrededor del 30% de ellas. Por ello recurrimos a cifras suministradas por el INCORA para completar, en parte, la información de prensa. Además, se consultaron dos periódicos adicionales para los años 80: *El Pueblo* y *El Periódico*.

<sup>13</sup> Héctor Mondragón, *Reforma agraria*, en documento VIII Foro Nacional Paz, Democracia, Justicia y Desarrollo, Bogotá, julio de 1996, pág. 9.

Gráfico 2



principal de las demandas, y en el último quinquenio ocupó el tercer lugar, precedida por aquellas concernientes a los derechos humanos y a las políticas agrarias. El crecimiento de estas últimas demandas, especialmente por la vigencia de derechos humanos, muestra un relativo cambio en el repertorio de la protesta en el campo, que analizaremos en la tercera sección. Por último, las peticiones en torno a servicios públicos y sociales, así como las ambientales, señalan los acercamientos que los campesinos e indígenas han hecho a las inquietudes planteadas también por los habitantes urbanos.

Nuestra base de datos también muestra un contraste entre la proyección de la luchas campesinas, que se dirigieron en un 80% a los entes nacionales, y el ámbito espacial desde donde brotaron, ya que el 66% fueron submunicipales. Esto quiere decir que, sin bien los habitantes del campo mantienen una base local en sus luchas, se proyectan cada vez más en términos nacionales.

La *geografía* de la protesta campesina entre 1975 y 2001 abarcó a 29 departamentos y 749 municipios del país. Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de protestas seguido de Santander, Bolívar, Cesar, Tolima y Cauca. Si se mira la evolución en el tiempo, se observan cambios en la conformación de regiones conflictivas en términos sociales, como ocurrió en el Magdalena Medio con el desplazamiento de las protestas en Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra, abundantes a mediados de los setenta, hacia el norte del departamento de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar, más conflictivos durante los años noventa. En el Urabá ocurrió algo similar como efecto de la presencia paramilitar. Otras zonas en donde desaparece prácticamente la protesta a lo largo de los años 90 son el Bajo Cauca antioqueño y La Mojana (ubicada entre Sucre, Bolívar y Antioquia). En municipios de Huila, sur del Tolima y Cauca, con alta presencia indígena, las luchas sociales disminuyen significativamente. Por último,

aunque en el conjunto de los años estudiados hay pocos registros de movilización en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, las protestas fueron significativas por las motivaciones que les dieron origen, por su duración, el número de participantes y la violencia con la que fueron reprimidas, especialmente las marchas cocaleras de 1996<sup>14</sup>.

Culminada la descripción de la dinámica de la protesta campesina, conviene volver los ojos sobre el fenómeno de los éxodos masivos en áreas rurales. La base de datos de luchas campesinas registra 424 éxodos en los 27 años estudiados<sup>15</sup>. El gráfico 1 mostraba la evolución de este fenómeno, que en realidad se hace visible como tal a partir de 1980, aunque algunas marchas campesinas hayan sido designadas antes como "éxodos"<sup>16</sup>.

Los *responsables* de los éxodos masivos fueron, en su orden: los paramilitares en el 47% de los eventos; la guerrilla en el 16%; y en el mismo rango están el Ejército y la Policía. Hubo además un 20% de éxodos propiciados por más de un responsable, lo que sugiere que fueron resultado de la confrontación entre dos o más de los actores armados. Al igual que las entidades que adelantan las estadísticas de desplazados, preferimos hablar de "responsables" de los éxodos y no de "actores", pues éstos corresponden a quienes los adelantan. En nuestro caso son los campesinos, indígenas y afrodescendientes, que constituyen las dos terceras partes del total nacional de desplazados. Por género, las cifras gruesas señalan que las mujeres son casi el 60% de la población que huye, y que la jefatura femenina de hogares rurales desplazados ha aumentado de 26.6% en 1995 a 33.2% en 1997<sup>17</sup>. Si a esto se le suma que la mayoría de los desplazados son jóvenes menores de 18 años, no hay que ser muy perceptivos para señalar que este fenómeno está marcando cambios en los roles tradicionales en la familia, así como nuevos retos para las mujeres jóvenes y las jefas de hogar<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Para un análisis detallado de los sucesos de 1996 en Putumayo, véase María Clemencia Ramírez, *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía de los campesinos cocaleros de Putumayo*, ICANH/COLCIENCIAS, 2001.

<sup>15</sup> Por la metodología adoptada, nuestras cifras resultan subvaluadas en comparación de las construidas por CODHES. Por ejemplo, para 2000 se habla de 254 éxodos masivos con 115.328 personas involucradas (Diego Pérez, *El desplazamiento...*, pág. 17). Nosotros sólo registramos 73 a partir de la información de prensa, y no contamos con datos del número de desplazados. Para balancear nuestras limitaciones acudiremos a las estadísticas del Episcopado y de CODHES para completar la descripción de los éxodos masivos.

<sup>16</sup> Así ocurrió con la marcha de los colonos de la región de El Pato hacia Neiva en septiembre de ese año. Véase, Alfredo Molano y Alejandro Reyes, *Los bombardeos en El Pato, Controversia*, No. 89, CINEP, 1980.

<sup>17</sup> Donny Meertens, *Desplazamiento forzado y género...*, pág. 409 y CODHES, *Un país que huye...*, pág. 414.

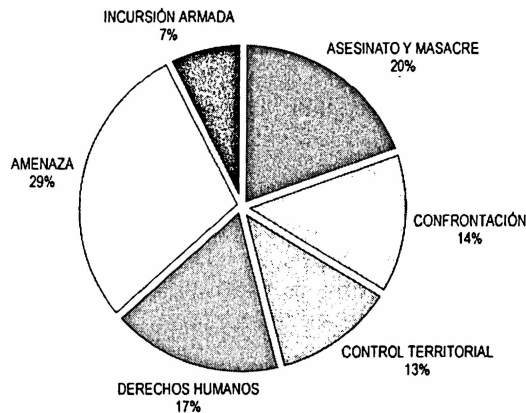
<sup>18</sup> Donny Meertens desarrolla estos aspectos en la ponencia citada *Desplazamiento forzado y género...* Véase también el estudio de Nora Segura, *La mujer desplazada y la violencia*, Informe presentado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, mimeo, Bogotá, marzo de 1996.

MOTIVOS DE LOS ÉXODOS CAMPESINOS  
1975 - 2001

Los *motivos* de los éxodos masivos, de acuerdo con nuestra base de datos, se plasman en el gráfico 3<sup>19</sup>. Aparentemente sólo los motivos relacionados con violencia, derechos humanos y DIH, explicarían los éxodos masivos del campo. Hay, sin embargo, elementos que no son visibles a los ojos de la prensa que parecen estar motivando el desplazamiento como el conflicto por la tierra<sup>20</sup>.

Gráfico 3

MOTIVOS ÉXODOS CAMPESINOS  
1975-2001



Otro es el problema de lucha por territorios entre los actores armados. Aquí lo que cuenta no es tanto el valor de la tierra sino la importancia estratégica de controlar zonas del país con fines militares pero también económicos. El 13% de los éxodos masivos fue reportado por la gran prensa como expresión de esta lucha entre actores

armados por controlar territorios. La fumigación de cultivos ilícitos no aparece explícitamente en los estudios cuantitativos, pero es señalada por algunos autores como un factor explicativo de migración forzada que tendencialmente cobra importancia con el paso del tiempo<sup>21</sup>.

Ahora bien, muchos de los llamados motivos de expulsión analizados pueden ser más bien consecuencias, esperadas o no, del desplazamiento forzado causado por los actores armados. Así ocurre con la ruptura de lazos sociales. Estadísticas generales sobre este fenómeno señalan que aunque la mayoría de los desplazados no pertenecían a organizaciones sociales o políticas (65,5% entre 1985 y 1994), se nota un pronunciado descenso en la vinculación a sindicatos y a partidos políticos: de 6,2% de los organizados en 1995 a 2,8% en 1997, y de 19,7% a 8,8%, respectivamente<sup>22</sup>. Para los analistas, ello significa que "estas organizaciones han sido exterminadas o se ha restringido su accionar"<sup>23</sup>. Pero aun las agrupaciones comunales, a las que pertenece la mayoría de los desplazados organizados, se han visto afectadas por la política de tierra arrasada practicada por los actores armados<sup>24</sup>.

En cuanto a la geografía de los éxodos masivos, dentro de los departamentos expulsores nuestra base de datos destaca a Antioquia (29,7%) seguida de lejos por Bolívar (10,6%) y Santander (8%)<sup>25</sup>. Si en la distribución espacial de la protesta vimos regiones que se transforman con el paso del tiempo, en términos de éxodos masivos es posible postular algo similar. Así, por ejemplo, el sur de Bolívar, que no figuraba en alto rango en el estudio del Episcopado, aparece en nuestras cifras con peso creciente a fines de los noventa. Otro puede ser el caso de la Amazonia y la Orinoquia que, si bien expulsa-

<sup>19</sup> Nuestros hallazgos coinciden con la tendencia general señalada por los estudios más amplios del desplazamiento forzado. Además de la diferencia en la forma de medición, cada estudio tiene categorías que no son del todo homologables. En cualquier caso, los tres motivos que más pesan en los estudios del Episcopado y de CODHES son amenazas, asesinatos y violaciones de derechos humanos. CODHES, *Un país que huye...*, pág. 82.

<sup>20</sup> En el estudio del Episcopado aparece que la coacción para abandonar la tierra figura como motivo en el 3,65% de los desplazamientos, a lo que se le puede sumar el 6,12% por desalojo violento de los predios. Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 57.

<sup>21</sup> Véase por ejemplo a Aura María Puyana, quien denuncia que "la migración involuntaria por causa de la fumigación de cultivos ilícitos no se visualiza aún como problema", Aura María Puyana, *Cultivos ilícitos, fumigación y desplazamiento en la Amazonia y Orinoquia*, en Camilo Domínguez y Fernando Cubides (eds.), *Desplazados, migraciones internas...*, *op. cit.*, pág. 240.

<sup>22</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 67, y CODHES, *op. cit.*, pág. 417.

<sup>23</sup> CODHES, *op. cit.*, pág. 417.

<sup>24</sup> Un desplazado de Urabá en 1997 decía: "La llegada de la guerra acabó con la organización comunitaria y campesina que teníamos en el Chocó, sus representantes tuvieron que huir. Ahora ninguna de las juntas de acción comunal funciona. Todas tenían personería jurídica, eran legales". Citado en Carlos A. Giraldo, Jesús Abad Colorado y Diego Pérez, *Relatos e imágenes...*, *op. cit.*, pág. 32.

<sup>25</sup> Similar distribución presenta la Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 46. En términos de regiones receptoras, nuestros datos no arrojan mucha información por cuanto la prensa registra el primer destino del éxodo forzoso, pero no hace el seguimiento del lugar de recepción de los desplazados que realizaron el Episcopado y CODHES, quienes hablan de Bogotá, además de Antioquia y Santander, como las zonas más receptoras. Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 48 y CODHES, *op. cit.*, págs. 80-81.



ban el 4,3% de los desplazados hasta 1997, la cifra no era despreciable por la baja densidad poblacional de esas regiones y por la tensión que genera la creciente área fumigada<sup>26</sup>.

#### LAS MÚLTIPLES CARAS DEL CONFLICTO AGRARIO

Es el momento de elaborar algunas explicaciones sobre el conflicto que aqueja al campo colombiano en el cambio de siglo como lo reflejan las tendencias observadas en protestas y éxodos masivos de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes. Los agruparemos en cinco aspectos que se profundizarán en esta sección: tierra, territorio, impactos económicos, políticos y sociales, en especial sobre las identidades colectivas.

Ya señalábamos que las demandas en torno a la *tierra* eran las que ocupaban el primer lugar en las protestas campesinas. Sin duda esto refleja el incremento en el proceso de concentración de la propiedad de la tierra. Si entre 1960 y 1984 había ocurrido una disminución relativa de la gran propiedad, para los años posteriores se reinició el avance de la gran propiedad, mientras continuaba la fragmentación de la pequeña<sup>27</sup>. A su vez, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resultados, pues han favorecido la titulación de baldíos, han afectado marginalmente las tierras dentro de la frontera agrícola y han promovido la colonización<sup>28</sup>. La concentración de la propiedad de la tierra se ha dado a la par con la expansión de la ganadería, la agroindustria y los cultivos ilícitos.

La expropiación violenta de tierras valorizadas por los trabajadores rurales no es un fenómeno nuevo en Colombia, aunque ahora cobra proporciones distintas. El estudio de los obispos concluía: "Los desplazados huyen dejando sus tierras en manos de sectores vinculados al narcotráfico que adelantan una 'contrarreforma agraria' con métodos violentos"<sup>29</sup>. Actividades de reciente auge como la expansión de los cultivos ilícitos, la actividad turística o la agroindustria, así como la existencia de fuentes de explotación minera o petrolera y de megaproyectos u obras de infraestructura, elevan los valores de las tierras tornándolas más apetecibles para los distintos empresarios. Si a esto se le agrega la expansión de la ganadería<sup>30</sup>, tenemos un cuadro distinto de los motivos de fondo de muchos éxodos masivos. Así se puede afirmar que, a pesar de las diferencias de actores y contextos "el conflicto por la tierra —en su valor agrario, agroindustrial, rentista y tesoro de recursos naturales— es un hilo conductor en la historia de la violencia colombiana, y una de las principales causas del desplazamiento interno"<sup>31</sup>.

Nuestros datos muestran que el 23,5% de los municipios donde se presentaron demandas por tierra, hoy son expulsores de población por desplazamiento forzado. Hay además una alta co-

incidencia entre los municipios que tuvieron participación alta y significativa de luchas sociales con aquellos donde se presentan éxodos. Esto último sugiere que el problema no es sólo económico sino que también hay intenciones de ganar espacios estratégicos para la guerra. Se trata de controlar los "corredores" hacia el exterior para el tráfico de armas y los negocios ilícitos que lo acompañan. En tiempos recientes los actores armados han esbozado el argumento de recuperar lo perdido, que detrás del aparente orgullo esconde esos motivos estratégicos<sup>32</sup>.

Así se pasa de la lucha por la tierra a la confrontación armada *por el territorio*. Como lo señalan los analistas, son dos conflictos distintos pero se cruzan<sup>33</sup>. Así, por ejemplo, mientras en zonas del Cesar predomina la pelea por la tierra, en Urabá hoy la tensión es territorial aunque la lucha por tierras aptas para el banano y suelos urbanos predominó en los años 70 y 80<sup>34</sup>.

¿Cuáles son los territorios en disputa? No son propiamente las zonas más deprimidas, pero tampoco son aquellas en donde hay procesos consolidados de crecimiento económico, como las áreas metropolitanas de las cuatro grandes ciudades. En esto hay una diferencia con la tradicional migración económica que salía de las zonas deprimidas hacia las más "desarrolladas"<sup>35</sup>. Los éxodos masivos desde el campo se presentan en las áreas de reciente colonización o de apertura de fuentes de riqueza agropecuaria o minera. Coinciden con las que enseñan más conflictos sociales en términos históricos —según nuestra base de datos entre 1975 y 2001—, así hoy la conformación de regiones conflictivas se haya alterado precisamente por los factores de violencia. Por tanto, parece haber una coincidencia espacial en áreas de apertura de fuentes de riqueza, con una alta conflictividad social y con la presencia de actores armados<sup>36</sup>.

La confrontación territorial tiene consecuencias de todo orden: demográfico, económico, político, social y cultural. En el primer sentido, hay una indudable alteración de los patrones tradicionales de migración, despoblando los campos y saturando las ciudades. Este proceso, a su vez, tiene profundos *impactos económicos*. No se trata sólo de las pérdidas individuales de tierras y viviendas —algo de por sí traumático para los desplazados—, sino de fenómenos agregados que repercuten incluso en los indicadores

*macroeconómicos*

<sup>26</sup> Según Aura María Puyana, si Samper había tratado de erradicar cultivos por fumigación en 143.847 hectáreas, 528% de lo que había hecho Gaviria, en el primer año de Pastrana se fumigaron 51.309 hectáreas —un crecimiento anual superior al 600%. El 91,5% de esas acciones fueron en las dos regiones en mención, lo que habla de su potencial futuro como expulsoras de migrantes involuntarios. Aura María Puyana, *op. cit.*, pág. 256.

<sup>27</sup> En 1984, los propietarios de menos de 10 hectáreas eran el 77,0% y poseían el 9,02% de la superficie, mientras que los propietarios de más de 500 hectáreas constituían el 0,46% y controlaban el 32,72% de la tierra. Para 1996, los propietarios de menos de 10 hectáreas, eran el 77,9% con el 7,82% de la superficie, y los propietarios de más de 500 hectáreas eran el 0,35%, pasando a controlar el 44,63% del área. Absalón Machado, *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*, Bogotá: El Áncora, 1988, pág. 72.

<sup>28</sup> Mario Valderrama y Héctor Mondragón, *Desarrollo y equidad con campesinos*, Misión Rural, vol. 2, Bogotá: IICA/Tercer Mundo, 1988, pág. 51.

<sup>29</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 14.

<sup>30</sup> "El país está subutilizando la tierra agrícola en sus 3/4 partes, mientras se sobreutiliza en ganadería el 132% del suelo". Absalón Machado, *op. cit.*, pág. 98.

<sup>31</sup> Federico Kircher, *Aspectos socioeconómicos del desplazamiento interno en Colombia*, en Varios autores, *El desplazamiento interno en Colombia*, Bogotá: ILSA, 1992, pág. 94. Los mismos desplazados así lo perciben. Hablando del Urabá chocoano, uno decía: "Hay mucho interés por nuestra tierra tan fértil, cruzada por cuencas que desembocan en el Pacífico y el Atlántico. Los problemas se presentan por ser una zona tan rica en recursos naturales. Es uno de los lugares del mundo donde hay mayor biodiversidad". Carlos Giraldo y otros, *op. cit.*, pág. 23.

<sup>32</sup> Tal parece ser el caso del reciente ataque a Bojayá (Chocó) por parte de las FARC con un saldo trágico de 119 muertos, la mayoría menores de edad, 80 heridos y sinnúmero de desplazados. *Informe de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su misión de observación en el Medio Atrato*, Bogotá, 20 de mayo de 2002, pág. 15.

<sup>33</sup> Los investigadores de CODHES señalan: "Las mejores tierras y los espacios estratégicos se constituyen en objetivo prioritario de fuerzas violentas", en *Un país que huye...*, *op. cit.*, pág. 75.

<sup>34</sup> Clara Inés García, *Urabá, región, actores y conflicto*, Bogotá: CEREC/INER, 1996.

<sup>35</sup> Tema abordado por Norma Rubiano y Eduardo Granados, *Migraciones internas y violencia en Colombia: el precio de los equilibrios regionales* en Camilo Domínguez y Fernando Cubides (eds), *op. cit.*

<sup>36</sup> A una conclusión similar llegaba ya la historiadora Catherine Legrand estudiando un siglo de conflictos agrarios: "Es significativo que las áreas donde la guerrilla rural ha contado con un apoyo sólido en el campo colombiano durante los últimos quince años son todas zonas de colonización". *Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950*, Bogotá: Universidad Nacional, 1988, pág. 223.

macroeconómicos. El cambio en la utilización de las tierras de los campesinos orientadas al pancoger hacia la ganadería, la agroindustria o los cultivos ilícitos produce una disminución de la oferta alimentaria, con la consiguiente escasez de bienes de consumo aun en las zonas de expulsión. El sector de alimentos entra a depender más de las importaciones. En términos agregados, también se puede hablar de pérdida de habilidades y destrezas de los campesinos que afectan el llamado capital social. El signo de destrucción de los actores armados se proyecta del posible enemigo humano a la naturaleza que es arrasada a su paso<sup>37</sup>. Se reproduce así la vieja paradoja del capitalismo: pobreza en medio de una guerra por la riqueza.

La apertura neoliberal intensificada en los años noventa se entremezcló con los factores de violencia para ofrecer un cuadro muy preocupante de comportamiento macroeconómico y sobre todo de indicadores sociales<sup>38</sup>. De esta forma no extraña el deterioro en la distribución de la riqueza —el coeficiente Gini pasó de 0,48 en 1988 a 0,56 en 2000— y el aumento de los índices de pobreza y de indigencia —cercas al 60% y al 24% en 2000, respectivamente<sup>39</sup>—. Aunque no sean indicadores totalmente imputables a los factores aducidos, y hayan sido acelerados por la recesión de fines de siglo, sin duda corresponden a un modelo socioeconómico excluyente que no data de ahora.

En lo *político*, el fenómeno del desplazamiento marca un cambio en el mapa electoral de las regiones afectadas. El estudio de los obispos colombianos citaba, a guisa de ejemplo, la disminución del caudal electoral de la UP en el Meta entre 1986 y 1990<sup>40</sup>. La democracia colombiana se ve también afectada por la abstención que conlleva el desplazamiento forzado al perder los vínculos partidistas y propiciar la incredulidad en la institucionalidad, especialmente por la impunidad que acompaña a los actos violentos que provocan los éxodos. La impunidad también dificulta el eventual retorno, porque no garantiza que los causantes de la expulsión sean sometidos a la justicia.

Además, el fenómeno al que nos referimos pone nuevos retos para la planeación y atención del Estado a la población desplazada en “empleo, vivienda, alimentación, educación, salud, recreación, transporte, espacio público y medio ambiente”<sup>41</sup>. Todos los analistas que trabajan el tema, incluidos algunos consultores oficiales, coinciden en afirmar que la respuesta estatal ha sido tardía en el mejor de los casos. A la ausencia de marcos jurídicos apropiados se suma la

inexistencia de instancias oficiales orientadas a la atención del desplazado, así como la falta de preparación de los funcionarios<sup>42</sup>. Todo ello no es sino un reflejo de la fortaleza desigual del Estado y de su precario control de las armas, a su vez resultado de la forma histórica como se ha construido<sup>43</sup>. De esta forma, el desplazamiento forzado es consecuencia de la debilidad del Estado y, paradójicamente, a medida que se incrementa, lo debilita aún más.

En este punto volvemos a recordar el eventual cambio de repertorio en las demandas de las protestas en el campo entre 1975 y 2001, de lo más material a lo más político. Además los habitantes subalternos del campo enfrentan crecientemente entes nacionales, así el ámbito de su lucha sea muy local. Otro aspecto por considerar es que en el marco de la Constitución del 91, los actores sociales tienden a plantear sus demandas en términos de derechos. Estos pasos pueden ser leídos, sin duda, como un signo de repolitización que parece ser común a otros actores y movimientos sociales en los últimos tiempos<sup>44</sup>. Ahora bien, al considerar las cifras sobre éxodos masivos, y en general sobre el desplazamiento forzado se percibe que este proceso, más que un acto voluntario y consciente de cambio de repertorio de la protesta, responde a la dinámica del conflicto agrario, y en especial al desborde de la violencia en el campo. Esto último no demerita el paso dado por quienes habitan en el campo hacia una mayor politización, sino que pone límites a una interpretación voluntarista de su acción.

En cuanto a las *consecuencias sociales* del desplazamiento forzado, ya mencionábamos la ruptura de los lazos sociales que tenían los campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados. Aunque no muchos estaban organizados, los sectores armados, en su afán de control territorial, sospecharon de cualquier forma de agrupación de la comunidad<sup>45</sup>. De manera selectiva amenazaron o asesinaron a dirigentes para producir temor y lograr una adhesión, nada voluntaria, de los que aún vivían en el territorio. Un desplazado de Urabá así lo percibía en 1997: “La gente está tentada a meterse en algún bando porque la persiguen y la señalan. El miedo a la muerte la lleva a filarse [sic] de algún lado. Además, eso es lo que buscan los combatientes con los civiles. Porque a los armados les da susto encontrarse con otro armado y dejan a los campesinos como blanco. El pueblo es el que paga las consecuencias de la guerra”<sup>46</sup>. Una de las consecuencias es la ruptura de la solidaridad por la mutua desconfianza que se genera.

Se afectan así la cultura y las identidades previas. Hay un indudable desarraigo que deja a los campesinos, en palabras de un desplazado, “azarados, desorientados, infelices porque amamos la tierra”. Metafóricamente agrega: “Estamos en una cárcel a la que no se le ven rejas”<sup>47</sup>. Al contrario de los refugiados de otros países, a los desplazados colombianos no los unen lazos

<sup>37</sup> “A los armados les da lo mismo quedarse en uno u otro lugar, porque ellos destruyen y se van. Pero para los campesinos es distinto, porque la tierra para uno es la vida”. Carlos Giraldo y otros, *op. cit.*, pág. 94.

<sup>38</sup> Jorge Iván González habla de una triple pérdida de capital: productivo, humano y social. *Recesión y política económica*, *Cien Días*, No. 45, julio-noviembre de 1999, págs. 38-41.

<sup>39</sup> Datos tomados de José A. Ocampo, *Reforma del Estado y desarrollo económico y social en Colombia*, *Análisis Político*, No. 17, septiembre-diciembre, 1992, pág. 16, y Edgar Baldión y Esteban Nina, *Coyuntura económica e indicadores sociales*, *Boletín*, No. 30, SISD-DNP, Bogotá, 2001, págs. 1-16.

<sup>40</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 77. Este caso no fue único como lo ilustra la politóloga Leah Carrol, en *Logros y límites de la elección popular de alcaldes en Colombia: la experiencia de los municipios con administraciones de la UP, 1988-1990*, en Jaime Caycedo y Carmenza Mantilla (editores), *Identidad democrática y poderes populares*, Bogotá: CEIS, 1993, pág. 61.

<sup>41</sup> Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 76. Los obispos destacan la crítica situación de los maestros amenazados y la dificultad del Ministerio de Educación para trasladarlos. Los miembros del magisterio eran el 4,7% de los desplazados hasta 1994 (*Ibid.*, pág. 59).

<sup>42</sup> Los analistas hacen la salvedad del papel positivo representado por la Corte Constitucional al proteger los derechos de los desplazados, generalmente por el fallo favorable de tutelas interpuestas por ellos. Diego Pérez, *op. cit.*, pág. 10.

<sup>43</sup> Para un desarrollo de esta perspectiva desde la hipótesis de “dominio indirecto” del Estado, véase Fernán González, *Para leer la política*, 2 ts., Bogotá: CINEP, 1997.

<sup>44</sup> Esa es una de las conclusiones que el equipo de Movimientos Sociales extrajo de la investigación *25 años de luchas sociales en Colombia*, Informe final a Colciencias, manuscrito, junio de 2002.

<sup>45</sup> Si bien esta sospecha es más crítica con los paramilitares que asimilan organización social con izquierda, también se hizo manifiesta en la guerrilla, especialmente en las zonas que perdieron y hoy están en plan de “reconquistarlas”. Así ocurrió en Urabá como lo describen varios testigos. Véase, por ejemplo, Carlos Giraldo y otros, *op. cit.*, pág. 94.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pág. 145.

<sup>47</sup> *Ibid.*, pág. 100.

étnicos o religiosos, sino simplemente la circunstancia de estar en una región conflictiva. La falta de homogeneidad en la situación liminar en que se hallan, hace que se desesperen y desarrollen estrategias de supervivencia invisibles hasta donde sea posible, cuando no de apatía<sup>48</sup>.

En los sitios de recepción —que no de “albergue”, pues poco albergan a los desplazados—, se reproducen imágenes negativas que alimentan mayor intolerancia. La gran mayoría confiesa no haber recibido apoyo en su migración involuntaria<sup>49</sup>. Algunos son vistos como “violentos” dependiendo del actor armado que controle la zona de donde provienen. Otros son vistos como “pobres”, es decir, posibles ladrones. Por una u otra imagen se desconfía de ellos. Ante los organismos oficiales aparecen como víctimas con la sospecha de que sean “falsos desplazados”<sup>50</sup>. La tensión entre “propios” y “extraños” los hace ocultar su identidad original y tener la menor visibilidad pública. Con razón se afirma que el desplazamiento forzado trae consecuencias psicológicas además de físicas y políticas<sup>51</sup>.

Para acabar de empeorar las cosas —si ello es posible—, en los lugares de recepción se tiende a reproducir las condiciones de violencia que los obliga de nuevo a huir. En las barriadas de las ciudades, el choque entre milicias progueurrilleras y avanzadas paramilitares, en el que también se involucra la Policía, obligan a muchos desplazados a seguir siendo “caminantes de siempre, indefensos que huyen de los atropellos y las balas”<sup>52</sup>. Así la violencia se prolonga sin fin reproduciendo patrones de exclusión<sup>53</sup>.

No obstante, éste no es el panorama total del desplazamiento forzado en Colombia. Hay signos de esperanza en el hecho de que no todos terminan atomizados y apáticos. Afortunadamente existen diferencias en el proceso de desplazamiento y de adaptación por lo que Donny Meertens llama el “equipaje” previo de los afectados<sup>54</sup>. Si se logran mantener los lazos regionales, y sobre todo las tradiciones organizativas, es posible aminorar los costos del desplazamiento y de la reubicación en los nuevos espacios. Así ocurrió con las comunidades de paz en Urabá a fines de los noventa, hoy infortunadamente bajo el fuego de los fusiles de nuevo<sup>55</sup>.

La situación crítica que viven los migrantes forzados ha llevado a muchos a agruparse una vez más generando nuevas identidades<sup>56</sup>. Según un estudio de la Fundación Mencoldes, desde comienzos de los 90 se han creado organizaciones de desplazados en una actitud manifiesta de “superar su condición de sujetos pasivos”<sup>57</sup>. En 1993 apareció el Comité Distrital de Desplazados en Bogotá, luego se dieron diversas formas organizativas que resaltaban la condición presente o el eventual retorno, así como mesas de trabajo sobre los temas del desplazamiento. A comienzos de 2000 hubo un encuentro nacional que conformó una Coordinación Nacional<sup>58</sup>. La experiencia enseña que son

más sólidas las organizaciones creadas en el entorno rural y relativamente cerca del lugar de origen, que en las ciudades donde la atomización hace presa de los recién llegados.

Pero los desplazados no sólo se organizan; también acuden a las protestas. Contra su deseo de pasar desapercibidos, las condiciones críticas en que viven los llevan a este último recurso para hacerse oír. Nuestra base de datos registró 48 protestas por parte de campesinos o indígenas desplazados entre 1975 y 2001; 33 de ellas en la modalidad de tomas de instalaciones estatales o de entidades como la Cruz Roja, y 15 movilizaciones. Los años de más acciones fueron 1998 con 18 y 2001 con 12. Bogotá concentró el mayor número (15), seguida de Barrancabermeja (9), Neiva y Bucaramanga (3 cada una) y Cali, Medellín y Barranquilla (2 cada una). Aún es temprano saber si estos actos crean o no nuevas identidades, pero con certeza indican una percepción de dignidad que rescata su condición humana.

En estas condiciones, el retorno es un horizonte cada vez más lejano. Si para el momento del estudio de la Conferencia Episcopal, el 36,3% mostró deseo de volver a sus lugares de origen, para fines de 1996 la proporción había disminuido a 18,3%<sup>59</sup>. Aunque la reubicación e instalación más definitiva en los lugares de recepción parecen ser la alternativa preferida, no constituye una solución de fondo al problema que provocó el desplazamiento forzado, el cual tiende a reproducirse en los nuevos escenarios urbanos.

Como lo muestran los estudios aludidos, cualquier alternativa al éxodo se facilita si hay “equipaje” en términos de identidad, formas asociativas y, por qué no, tradiciones de protesta ante las injusticias y las exclusiones. Esto enseña la importancia de un tejido social previo o reconstituido que puede crear proyectos de vida nuevos o readaptados<sup>60</sup>. Con nuevas identidades, o afianzadas las anteriores, los desplazados demandan del Estado y la sociedad atención a sus precarias condiciones en lo inmediato, y planes serios de retorno, de reubicación o de asentamiento definitivo. Si no los oyen podrán incurrir en el costo de nuevas protestas, costo que nadie busca por principio pero que a veces se hace necesario. En este caso ya no estaremos ante una masa de entes pasivos, sino ante hombres y mujeres conscientes de su condición, que reemprenden el camino de ser sujetos de su historia.

Como lo hemos mostrado en estas páginas, las dos caras del conflicto agrario —protestas y éxodos masivos— convergen en la necesidad de construir espacios públicos para dirimir las contradicciones. En ellos se fortalecen los actores sociales y políticos en forma autónoma y sin acudir al aniquilamiento del adversario. Sólo de esa forma contaremos en Colombia con una democracia que permita en el presente construir una sociedad más vivible en donde el sello no sea la exclusión y la humillación de los permanentes caminantes sino su dignidad humana π

<sup>48</sup> Es la interpretación, un poco pesimista, de Michel Agier y Odile Hoffman, *Pérdida de lugar, despojo y urbanización. Un estudio sobre los desplazados en Colombia* en Camilo Domínguez y Fernando Cubides (eds.), *op. cit.*, pág. 122.

<sup>49</sup> Así ocurrió con el 42,4% de los hogares con vínculos rurales según CODHES *op. cit.*, pág. 82.

<sup>50</sup> Donny Meertens, *op. cit.*, págs. 414-418.

<sup>51</sup> El estudio de los obispos destacaba, entre otros aspectos, la disolución de lazos conyugales y la propensión al consumo de alcohol y de drogas. Conferencia Episcopal de Colombia, *op. cit.*, pág. 78.

<sup>52</sup> Testimonio en Carlos Giraldo y otros, *op. cit.*, pág. 93.

<sup>53</sup> CODHES, *op. cit.*, pág. 425.

<sup>54</sup> Según la autora, las mujeres parecen sufrir menor traumatismo en la nueva situación por mayor adaptación a las nuevas fuentes de trabajo (doméstico o en la venta ambulante), pues los oficios de los hombres son menos útiles en las ciudades. Por eso ellas también muestran menores índices de desempleo. *op. cit.*, págs. 424-429.

<sup>55</sup> Véanse las declaraciones de las comunidades de desplazados del Urabá antioqueño y chochoano en 1997, en Carlos Giraldo y otros, *op. cit.*, págs. 35-59.

<sup>56</sup> CODHES, *op. cit.*, pág. 430.

<sup>57</sup> *La organización de la población desplazada en Colombia y la reconstrucción del tejido social*, en Seminario de Desplazamiento, Conflicto, Paz y Desarrollo, Bogotá, 30 de mayo a 2 de junio de 2000, pág. 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*, págs. 1-6.

<sup>59</sup> CODHES, *op. cit.*, pág. 84.

<sup>60</sup> De nuevo Donny Meertens llama la atención sobre la diferencia de género en las expectativas de futuro: si 50% de sus entrevistados dicen tener un nuevo proyecto de vida, entre las mujeres la proporción sube a 70%. *op. cit.*, pág. 430.